

Epílogo

María Bilbao Azpiazu

**Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Madrid/España**

José Manuel Azcona Pastor

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid/España

La internacionalización de las empresas españolas fue muy poco significativa hasta 1990. El sector exterior y las inversiones directas en el extranjero eran apenas inexistentes y, sin embargo, en la actualidad, nos hallamos inmersos dentro de una vorágine internacionalizadora y expansionista. Esta presencia española en el extranjero, sobre todo en el ámbito iberoamericano, se ha visto propiciada en los últimos tiempos por la conjunción de una serie de factores tanto internos como de índole externa, fuertemente imbricados. Por un lado, la estabilidad macroeconómica del país, el control de la inflación o la reducción de los tipos de interés crearon un clima económico favorable a la inversión en el exterior. Además, la existencia de una ventaja comparativa derivada de un idioma y una ambientación cultural común, ha facilitado la comunicación y la rápida y eficiente transferencia de conocimientos y modalidades de gestión empresarial. Por otro lado, la necesidad de ganar tamaño, de extender y diversificar sus actividades fuera del ámbito habitual, de consolidarse en ciertos mercados para afrontar los retos competitivos y de supervivencia en un contexto de globalización, incentivaron la expansión empresarial fuera de nuestras fronteras.

Otro determinante esencial de la elección iberoamericana como destino principal de las inversiones españolas, lo constituyen las políticas económicas seguidas en estos países iberoamericanos (reforma de la banca local, privatizaciones), así como el aumento de la clase medial zonal (con la consiguiente demanda de bienes, servicios e infraestructuras modernas). Finalmente, la crisis económica de 2007 ha dejado su impronta en los intercambios comerciales internacionales, favoreciendo la orientación hacia las economías emergentes, cuyos sistemas bancarios ofrecen unas mayores ventajas competitivas en la

actualidad, y ha permitido a las empresas españolas suavizar el impacto y equilibrar en cierto modo los malos resultados obtenidos en Europa con los dividendos que obtienen de sus inversiones en Iberoamérica. Por todo ello, aquel mercado zonal se ha configurado como destino preferente para las inversiones españolas y explica el previsible incremento de esta tendencia inversionista, que ha venido de la mano de empresas como Repsol, Endesa, Telefónica, OHL, Sacyr, los grupos hoteleros, Gas Natural, Iberdrola, Maphre, BBVA y el Grupo Santander, que con el 16% de la cuota de negocio, es el líder del sistema bancario iberoamericano. También hay que incluir a Zara, del Grupo Inditex, en esta nueva impronta empresarial española y de mejora expansiva de nuestra imagen.

En lo que se refiere a la inversión directa española en el exterior, como acabamos de señalar, ésta se orienta prioritariamente hacia el ámbito iberoamericano. Entre 1993 y 2009, los flujos de inversión española directa en este territorio representaron en promedio el 35% del total de la realizada. En lo que respecta a los sectores escogidos para la internacionalización, han sido aquellos relacionados con los servicios los que han gozado de mayor predicamento: banca, telecomunicaciones y energía (gas, petróleo y electricidad), ya que es en estas áreas donde las empresas españolas han venido rentabilizando mejor sus ventajas competitivas, al constituir un mercado que les permite ganar dimensión y obtener economías de escala. Y de este modo, la IED española se acerca a su propósito de convertir el continente americano en una extensión del mercado nacional. Esta estrategia requiere, empero, de un proceso inversor de gran magnitud que únicamente puede resultar beneficioso a largo plazo, lo cual coincide con su vocación de permanencia que le diferencia de otras inversiones extranjeras.

La intensa y rápida llegada de las compañías españolas a Iberoamérica supuso un cambio en las estrategias de sus competidores, tanto locales como internacionales. La adquisición de posiciones de liderazgo en diferentes sectores tuvo repercusiones en la percepción de los consumidores, en sus hábitos, y supuso una mejora de la forma, la calidad y precio en la prestación de dichos servicios. Sin embargo, esta inmersión española en Iberoamérica no estuvo exenta de dificultades derivadas de antagonismos sociales e institucionales, que debilitaron la imagen de los empresarios españoles, generando una actitud crítica hacia la instalación de nuestras industrias en los principales mercados, creándose una imagen controvertida de dicha presencia. Con el paso de los años, y para tratar de paliar esta situación, se pusieron en marcha una serie de iniciativas encaminadas a mejorar dicha visión, bien a través de actuaciones de las Fundaciones de las principales firmas, o directamente mediante programas sociales, culturales o educativos. Con todo, podemos observar que en la actualidad, la imagen-marca España continúa siendo débil y fuertemente estereotipada y no sabe explotar el poder real que representa su cultura. En relación a la valoración de la imagen de España en América Latina, ésta ha experimentado un ascenso positivo desde mitad de los años ochenta, alcanzando una mejor estimación en los países que presentan una tasa de inmigración en España más elevada (Argentina, Ecuador, Colombia y República Dominicana) y en aquellos con menor renta per cápita. Asimismo la opinión acerca de

nuestro país mejora en los centros urbanos y entre los altos ejecutivos. La edad, por el contrario, influye negativamente en la percepción de España y, en relación al género, es más valorada entre los hombres que entre las mujeres. Otros factores como la AOD (Ayuda Oficial Directa) y las inversiones extranjeras, al contrario de lo que a priori podría parecer, no se traducen, sin embargo, en una mejora de la imagen española. En el caso de las inversiones, las críticas recaen sobre todo en la participación española en las privatizaciones y aprovechamiento de su situación monopolística, realizadas por los modelos de gobernación populista. Con todo, las entidades españolas en Latinoamérica, presentes principalmente en el sector servicios, se han convertido en uno de los factores de mayor influencia en la imagen positiva que se tiene en la región de España. Centrándonos en los dos países objeto del presente estudio, podemos realizar algunas conclusiones.

En la última década se ha producido una intensificación de la inversión española directa tanto en Brasil como en República Dominicana, como consecuencia de las reformas estructurales (económicas e institucionales) emprendidas por ambos países, que han llevado a nuestro país a convertirse en el segundo inversor en aquel país. Los procesos de liberalización, apertura y privatización de sus economías han desempeñado un papel fundamental en la creación de oportunidades y en la generación de confianza, permitiendo no sólo una entrada de inversión directa en dicho país sino también la ampliación del mercado, de nuevos sectores al capital extranjero, de manera que a los tradicionales ámbitos de las telecomunicaciones, la banca y la energía, se ha unido la inversión realizada por los grupos hoteleros, las empresas constructoras o la industria textil.

Sin embargo, junto a estas oportunidades y al tamaño del mercado, que constituye una de las principales ventajas de localización de las economías latinoamericanas, las empresas españolas se encontraron con una serie de costes y riesgos en estos países de destino entre los que cabe mencionar la necesidad de superar las rigideces del mercado laboral, pero sobre todo su inestabilidad macroeconómica e institucional y el nivel de corrupción del país. En este último aspecto, es de destacar que el grado de percepción de la corrupción no tiene un efecto negativo sobre la inversión española directa, lo que podría explicarse por una dilatada experiencia de gestión en Latinoamérica que ha permitido el desarrollo de capacidades de organización donde coexiste este tipo de riesgo. Y eso que, uno de los principales problemas de las economías en Iberoamérica, es el de la corrupción político-institucional y que afecta a todo su entramado social.

En lo que se refiere a República Dominicana, la llegada de empresas españolas a finales de los ochenta del pasado siglo, vino precedida de una emigración de otra índole que merece destacarse brevemente, ya que supondrá el germen de la presencia española en la isla caribeña. En este sentido, podemos observar que si bien la emigración española a República Dominicana nunca ha sido muy importante en términos cuantitativos en ningún periodo histórico, podemos destacar una serie de oleadas de

inmigración española en tierras dominicanas. La primera de ellas se produjo tras la guerra hispanoamericana de finales del siglo XIX y la pérdida de las colonias de Cuba y Puerto Rico. La segunda oleada tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX, y tenía como meta mejorar el nivel de vida de los españoles que emigran a la isla y se dedican a pequeños negocios y a la construcción. Tras el estallido de la Guerra Civil española, esta inmigración de trabajadores se combinará con otra de tintes políticos. Posteriormente, a mediados de los años cincuenta, Trujillo impulsará lo que se denominó una emigración dirigida, orientada a obtener mano de obra para la agricultura. En tiempos más recientes, a mediados de los ochenta, los inmigrantes a tierras dominicanas eran sobre todo profesionales, ingenieros, trabajadores del sector hostelero y estudiantes de medicina y odontología. Se trata esta última de una inmigración comercial y profesional que hizo aumentar el nivel cultural del país de manera espectacular proporcionando un gran valor añadido.

La emigración española de carácter tecnocrático, vinculada a las multinacionales españolas que se produce desde mediados de los años ochenta, ha contribuido de manera específica al desarrollo y modernización de República Dominicana. Este impulso inversor, que sitúa a España en el segundo puesto, tras Estados Unidos, con un aporte anual de doscientos millones de dólares, se vio propiciado por las medidas técnicas impuestas por el gobierno dominicano que facilitaron la capitalización en el país, así como por el uso de un idioma común que proporcionó fluidez a la comunicación. Además, según se desprende de los datos de UNCTAD, República Dominicana entraría a formar parte de los denominados «Front Runners», es decir, los países con mejores condiciones para invertir debido a la existencia de una fuerza laboral barata y cualificada, unas infraestructuras modernas y la adopción de unas medidas legislativas necesarias para favorecer la atracción de capital extranjero. En este sentido es significativa la revisión de la legislación sobre inversiones, las mejoras en la recolección de datos de IED y la introducción de una agenda y ley de competitividad, que intentan promover una mayor liberalización y apertura de la economía dominicana al comercio y a la inversión internacional -sobre todo de ciertos sectores que antes quedaban restringidos a inversiones nacionales- con vistas a aumentar la competitividad del país y fomentar su desarrollo económico, gracias al aprovechamiento de sus ventajas comparativas, así como su inserción en los mercados regionales y globales.

La inversión española en República Dominicana se centra en sectores clave tales como el turismo, la generación de energía y el mercado inmobiliario. Asimismo es destacable la especial aportación de la ayuda al desarrollo otorgada por España en el ámbito de la cooperación bilateral, que ha contribuido a la configuración de las clases medias dominicanas. Todos estos extremos aparecen recogidos en la prensa local y en la mayoría de los testimonios acotados de políticos y tecnócratas, evidenciándose la buena imagen que en términos generales presenta la inversión española -excepción hecha de la realizada en el sector eléctrico- en la isla caribeña. En relación a la industria turística, República Dominicana posee todas las condiciones

necesarias para el desarrollo productivo vinculado al sector, su ubicación estratégica y sus atractivos paisajísticos, la convierten en un interesante destino de ocio, receptor de todo tipo de inversión extranjera directa. En este sentido, la actuación hotelera española ha constituido uno de los hitos más importantes para la sociedad dominicana proporcionando una gran estabilidad macroeconómica al país, ya que los ingresos por turismo suponen el mayor flujo de inversión de capital del país y genera bolsas de trabajo constantes a través no sólo de los empleos directos, sino también de los salarios indirectos que esta actividad origina. Asimismo ha permitido una modernización de la nación a nivel estructural, mediante la renovación tecnológica del entorno, una mejora de las infraestructuras y el aporte a la capacitación laboral del trabajador dominicano. Todo ello ha tenido como consecuencia el consiguiente aumento del nivel de vida de los dominicanos. Por otro lado, esta industria hotelera española, pionera en la isla, ha fomentado la competencia del mercado turístico, al ser emulada por corporaciones no sólo españolas, sino principalmente canadienses e italianas, erigiendo a República Dominicana como principal destino turístico del Caribe insular, a través de la práctica del todo incluido. No obstante, es preciso señalar la denuncia realizada por distintas personalidades españolas en la isla, pertenecientes a sectores diversos y que hace referencia a la corrupción institucional que afecta a República Dominicana, la falta de transparencia, los retrasos en los pagos e incumplimiento de los contratos. Un análisis de los indicadores de República Dominicana nos permite resaltar los resultados que contamos ahora.

Según indican los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el periodo comprendido entre 1990 y 2009, República Dominicana ha crecido económicamente a un ritmo promedio anual del 5%. Sin embargo, este crecimiento sostenido y considerable del PIB no ha producido una reducción significativa del nivel de pobreza, que solamente ha experimentado una tímida disminución en las dos últimas décadas. Además, los niveles de desigualdad se han visto incrementados, ya que la población con más elevado nivel de riqueza ha sido la mayor receptora del incremento de riqueza experimentado por el país mientras que los más pobres han seguido sufriendo un deterioro en su situación económica. Esto es debido, en parte, al modelo de recaudación adoptado por República Dominicana, que pone el acento en la tributación indirecta. En lo que respecta al gasto, tanto la inversión en salud como en educación son bajas y decrecen anualmente, sin que se realicen esfuerzos significativos por aumentar su participación en la financiación de ambos sectores, de ahí que se observe un empeoramiento de los indicadores de calidad educativa y de salud en líneas generales, con las preocupantes implicaciones que se derivan de esta situación dado que se trata de dos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

Estos datos distan mucho de las recomendaciones adoptadas en la Cumbre de Abuja, celebrada en Nigeria en el año 2000, para garantizar unos servicios básicos adecuados que permitan el desarrollo de los países de grado bajo y medio de crecimiento y consistentes en dedicar un 15% del presupuesto estatal a la salud y un 20% al sector

educativo. Estos objetivos solo podrán ser alcanzados en 2015 si República Dominicana implementa unas estrategias adecuadas, fortaleciendo las políticas públicas y distribuyendo la riqueza y los recursos de una forma más equitativa.

La AOD (Ayuda Oficial Directa), cuyo objetivo fundamental es la reducción del nivel de pobreza, tan sólo representó en promedio el 0'43% de su PIB en el periodo 1990-2008, por lo que carece de capacidad de incidir directamente en la caída de los niveles de ésta. La opción para tratar de superar esta situación consiste en situar la AOD en áreas estratégicas dentro del sistema político que sean capaces de generar un efecto catalizador del proceso de desarrollo, de manera que la cooperación internacional se convierta en el instrumento que facilite a las autoridades nacionales la disminución de la tasa de pobreza. En aras de conseguir este objetivo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en República Dominicana está implementando el «nuevo modelo de cooperación» centrado en la modernización institucional y la instalación de capacidades.

Volviendo de nuevo a la presencia española, ésta se registra en forma de asociacionismo en la isla caribeña desde 1917, encarnada en el importante papel que vienen desempeñando la Casa de España o la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de República Dominicana. Su objetivo es agrupar los esfuerzos mercantiles e industriales de la colonia española, así como luchar por la consolidación del Estado de Derecho y la legalidad de las operaciones realizadas. Además, tales inversiones españolas en el país (que representan el 20% del total, después de las estadounidenses) cuentan con el amparo de la normativa comunitaria. El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y el Foro del Caribe (Cariforo), vigente desde 2008, garantiza los intercambios comerciales y laborales entre ambos contratantes, favoreciendo la libre competencia en la expansión del turismo y la inyección de capitales en la economía dominicana.

Los inmigrantes que cruzaban el Atlántico desde los años veinte, fundamentalmente gallegos y asturianos de origen humilde, se ocuparon del sector de la construcción, de la alimentación y del comercio, constituyendo los incipientes supermercados e hipermercados de la isla. La emigración política, de origen republicano y marcado carácter intelectual, fomentó el empuje cultural, incentivando la creación de escuelas de belleza, facultades de humanidades, la orquesta sinfónica nacional o el instituto cartográfico. También los agricultores poblaron las fértiles tierras dominicanas, dejando para la posteridad sus conocimientos y sus técnicas de cultivo. El perfil de la emigración española de los años ochenta y noventa del siglo XX ofrece inversiones y tecnología, y constituye uno de los motores del país en los sectores de turismo, la generación de energía, el comercio y el mercado inmobiliario.